------ En la ciudad de Rawson, capital de la Provincia del Chubut, a los 11 días del mes de mayo del año dos mil diecisiete, se reúnen en Acuerdo los integrantes de la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativa, de Familia y Minería del Superior Tribunal de Justicia, con la Presidencia de su titular, Mario Luis Vivas y asistencia del señor Ministro Dr. Miguel Ángel Donnet, para dictar sentencia en los autos caratulados: **"G. P., A. A. y Otros c/Provincia del Chubut s/Demanda Contencioso Administrativa" (Expte. N° 22.719 -G- 2012**). Atento el sorteo oportunamente efectuado, por aplicación de lo dispuesto mediante Acordada N° 3204/00, resultó el siguiente orden para la emisión de los respectivos votos: Dres. Donnet, Vivas y Guinle. De conformidad con los Acuerdos Plenarios N° 4499/17 y 4502/17, la presente se emite con dos votos.----------

------ Acto seguido se resolvió plantear y votar las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es procedente la demanda? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?----------

---- A la primera cuestión el Dr. Donnet dijo:----------

------ I.1. A fs. 197/220 y vta. se presentan los señores A. A. G. P., A. M. B., M. A. T., E. B. G., H. D. R., H. M. S., H. D. L., S. L. C., J. V. C., G. S. B., R. M. H., O. R. A. D., C. F. S., V. A., C. A. A., C. M. S., J. A. R., C. S. G., M. A. C., F. E. M., H. R. C., J. M. S., J. O. M., E. H. L., N. D. G., J. R. C., S. M. A., R. A. A., S. M. G., F. E. R., G. M. J. P., A. L. T., N. O. H., C. A. S., F. A. T., D. H. F., J. O. G., J. L. S., M. L. R., P. C. B., W. D. F., C. A. O., N. A. A., H. E. Q., N. E. F. S., D. M. A., R. C. S., C. D. R., D. I. T. y A. P. G., dependientes de la Policía de la Provincia del Chubut, para promover esta demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción contra el Estado Provincial.----------

------ Objetan el mecanismo de cálculo de diferentes rubros de su liquidación salarial aplicado por su empleadora, la Provincia del Chubut.Describen la pretensión en el punto *"III.-Objeto"*,la completan a 218 vta./ 219 (punto *"VIII.Monto del reclamo-Rubros reclamados"*)y la amplían a tenor del escrito agregado a fs. 223 y vta..----------

------ En el apartado a) solicitan el pago de las diferencias salariales que estiman surgirán de aplicar el art. 147, *in fine*, de la Ley XIX N° 8 en sus liquidaciones, "con retroactividad a los períodos no prescriptos". Solicitan que el 88% de los haberes mensuales que reclaman -conforme aquel precepto- se tome sobre la remuneración total bruta que perciba un Policía Federal de igual grado, jerarquía y antigüedad con haberes regularizados por sentencia judicial y con destino en esta provincia. Advierten que estos "tienen diferencias en más… respecto al que presta servicios en la Capital Federal".---------- En b) requieren el pago de otras diferencias salariales, conforme su jerarquía y antigüedad, que entienden deben surgir de la aplicación del art. 149, primer párrafo, *in fine*, de dicha Ley XIX N° 8 y con retroactividad a los períodos no prescriptos, por el suplemento zona desfavorable.----------

------ Extienden lo pretendido en a) y b) al " *pago de las prestaciones dinerarias futuras que en concepto de haberes mensuales y por diferencias por errónea liquidación… correspondan liquidar y abonar hasta el día en que se extinga la*

relación de empleo" que los vincula con la demandada. Advierten que su pretensión alcanza a la revocación por causa de nulidad o ilegitimidad de todo acto administrativo en el que se haya decidido la no aplicación de dichos arts. 147, último párrafo,y 149, primer párrafo, *in fine*,de la Ley XIX Nº 8 (nueva numeración dada por el Digesto Jurídico Provincial a los arts. 148 y 151 del Decreto Ley N° 1561, respectivamente); y a hacer cesar la ilegal omisión en la liquidación y pago de los haberes, conforme a derecho.----------

------ En c) reclaman el pago de las diferencias salariales conforme surge de lo prescripto por el art. 149, primer párrafo, de la Ley XIX N° 8, en tanto consideran erróneo el modo en que se liquida el concepto "Suplemento General por Antigüedad", que se calcula solamente sobre el sueldo básico y riesgo profesional, excluyendo a los demás adicionales o bonificaciones. Entienden que debe liquidarse sobre la asignación total del cargo de cada uno de los reclamantes, con retroactividad a los períodos no prescriptos y hacia el futuro.----------

------ En d), reclaman las diferencias salariales que resultarán de la equiparación entre los "haberes básicos" que perciben los agentes pertenecientes al Escalafón Servicios y los del Escalafón Comando, de resultas de que esta Sala previamente declare la inconstitucionalidad del art. 3 de la Ley Nº 5415 (que derogó el art. 149 del Decreto Ley Nº 1561). Ello, desde que cada suma es debida y con retroactividad a los períodos no prescriptos. En su caso, solicitan se declare la inconstitucionalidad del art. 2 de la Ley V Nº 66 porque consideran que fija un límite salarial a su pretensión**.**----------

------ Respecto de todas las pretensiones -aclaran-, más los intereses legales que fija el Banco del Chubut SA para las operaciones de descuento de documentos comerciales desde que cada suma fue debida y hasta su íntegro pago. Con costas.--

------ En cuanto al monto que cada uno de los accionantes reclama por aplicación de los artículos 147 y 149de la Ley XIX N° 8, anunciaron que surgirá de una Pericia Contable que ofrecerán oportunamente y en la que el experto deberá liquidar conforme a esta preceptiva.----------

------ I.2. En el relato de los hechos, los accionantes afirman que la retribución de los empleados públicos se integra no sólo con la asignación básica del respectivo cargo; además, con los adicionales o bonificaciones que establece la ley antes citada. Aducen que el sueldo básico y los adicionales constituyen, en su conjunto e individualmente, derechos subjetivos a dichas percepciones, que se convierten en derechos adquiridos cuando el servicio se prestó, una vez transcurrido el plazo legal para su cobro.----------

------ Explican que los adicionales son prestaciones accesorias o complementarias del salario básico, que pueden ser generales para todos los agentes que revisten en una misma categoría o función, o bien particularizarse individualmente cuando el agente reúna ciertos requisitos preestablecidos por la norma de carácter general.----

------ Se apoyan en doctrina y jurisprudencia y aseveran que es principio del derecho laboral, que si no se demuestra una causa distinta, se presume que las prestaciones recibidas por el empleado de su principal tienen por causa los servicios subordinados

de aquel y son de carácter salarial. Sostienen que dicho principio es aplicable al ámbito público y que el contrato de trabajo entre el Estado provincial y el personal policial es bilateral en el que las obligaciones fundamentales de ambas partes consisten, para el trabajador, en poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador y para el Estado, en pagar una remuneración como contraprestación.----------

------ Transcriben el art. 147 de la Ley XIX Nº 8 y desarrollan argumentos relativos a su aplicación. Expresan que el precepto no admite ningún tipo de dudas interpretativas en cuanto dispone que el haber mensual del personal policial provincial "… no podrá ser inferior al… 88% de los haberes que perciba la Policía Federal para igual grado y jerarquía…". Manifiestan que el Estado Provincial desde hace años incumple esto, al abonarles sus haberes por debajo de la pauta señalada por el artículo. Aseguran que ello surgirá una vez que se cotejen sus recibos de haberes con las escalas salariales de la fuerza policial nacional.----------

------ Advierten que los agentes de la Policía Federal, por efecto de innumerables sentencias judiciales, han visto incorporado a sus haberes las sumas no remuneratorias dispuestas en los Decretos Nº 2744/93, 1255/05, 1126/06, 861/07, 884/08, 752/09, 1262/09, 883/10 y 927/11, en consonancia con lo establecido por el art. 75 de la Ley Nº 21965 y el art. 385 del Decreto Reglamentario Nº 1866/83. Destacan que los haberes reales, regularizados por esas sentencias judiciales, resultan más elevados que los dispuestos en dicho Decreto Nº 927/11.----------

------ Sostienen que el Estado Provincial, en su carácter de empleador, tiene la responsabilidad y el deber de abonar las remuneraciones que por ley les correspondan, observando para ello las normas reglamentarias en materia salarial y adoptando las medidas necesarias para su tutela, en resguardo del trabajador.--------

------ Su omisión -acusan- lo hace responsable por el perjuicio económico que hubiese causado. En el caso, consideran que este se configuró por no habérseles garantizado sus haberes conforme mandan los arts. 149 y 147 *in fine* de la Ley XIX Nº 8.----------

------ Estiman que en consecuencia, la demandada ha vulnerado el principio de legalidad establecido en la Ley I Nº 18, en tanto prescribe que todos los órganos administrativos deben proceder y decidir conforme a la ley y a las disposiciones fundadas sobre ella.----------

------ Arguyen que el incumplimiento por parte de la accionada en abonar sus haberes conforme lo establecen los arts. 147 y 149 de la Ley XIX Nº 8, ha constituido un enriquecimiento sin causa por su parte, por las diferencias salariales no abonadas.----------

------ Advierten que el reclamo del rubro "zona desfavorable", previsto en aquella disposición no debe confundirse con el que se abona por los arts. 5 y 6 de la Ley I Nº 355, modificado su monto por la Ley I Nº 372, ya que estas normas prescriben el pago de un adicional no remunerativo y no bonificable, mientras que el del art. 149, primer párrafo, *in fine*, de la Ley XIX Nº 8, es un suplemento general, bonificable y remunerativo de carácter salarial.----------

------ Estiman que, en consecuencia, la demandada ha vulnerado el principio de legalidad establecido en la Ley I Nº 18, al incumplir su obligación legal de abonar los haberes en la forma descripta.----------

------ Por otra parte, estiman que la legitimidad de su reclamo "… no depende de la previsión presupuestaria, aunque la ley XIX - N° 8 (Art. 147) es absolutamente clara al respecto;… el Estado provincial debió prever esta contingencia al elaborar su presupuesto anual cada año…". Adunan jurisprudencia.----------

------ Al respecto, afirman que las leyes, generales y especiales, están revestidas de ciertas peculiaridades. Subrayan que la iniciativa legislativa de remisión y/ o establecimiento de los gastos en cumplimiento de las obligaciones del Poder Ejecutivo está reservada al gobierno, único legitimado y obligado a presentar su estructura.----------
-

------ Consideran que no podrá invocarse el art. 135, inc. 4, de la Carta Magna Provincial como defensa para fundar la improcedencia del presente reclamo, toda vez que está en juego la "aptitud de un Derecho Subjetivo" el que, a través de un revestimiento de cálculos y partidas, podría encubrir un acto "ilícito" de desconocimiento. Traen a colación el art. 14 bis de la CN y subrayan que los tres Poderes, tanto nacionales como provinciales, están obligados a observar y garantizar los derechos sociales allí consagrados.----------

------ Agregan que se está frente a un caso de incumplimiento, por parte del demandado, de una ley especial de raigambre constitucional y que su causa podría obedecer al impacto económico que ocasionaría la adecuación salarial de los funcionarios policiales. No advierten una situación de "derogación" o "suspensión" por alguna interpretación basada en que "si no está la remesa, no hay obligación de pago". Señalan que su inclusión en la ley anual de presupuesto es contraria a la Constitución y que su falta constituye una restricción ilegítima por parte del Poder Ejecutivo provincial, quien calcula el impacto global del ajuste en sus arcas.---------

------ Creen encontrarse legitimados para promover la presente acción, con sustento en el principio de enriquecimiento sin causa. Enumeran los requisitos que dicen han determinado la doctrina y jurisprudencia para su procedencia, a saber: enriquecimiento del demandado, empobrecimiento del demandante, nexo causal entre estos, ausencia de causa y carencia de toda otra acción. Desarrollan luego cada uno de esos recaudos. Citan jurisprudencia de este Tribunal.----------

------ Consideran los accionantes que es palmario el enriquecimiento de la demandada, toda vez que el incumplimiento en el pago de sus remuneraciones durante el período reclamado, por no efectuarlo de acuerdo a lo establecido en esos dos preceptos, derivó en un "ahorro" que la benefició. Mientras que su empobrecimiento se configuró como consecuencia del enriquecimiento apuntado entienden-, en la medida que ellos no han percibido una justa retribución según las leyes vigentes en ese lapso. Arguyen que ha quedado acreditado el nexo causal entre ambos extremos, con los servicios prestados y con la falta de correspondencia con el sueldo que deberían percibir conforme a la ley.----------

------ Expresan que no existe ninguna causa jurídica justificativa del incumplimiento legal en que ha incurrido el Estado provincial, sostenido en el tiempo, y que la gratuidad de los servicios del empleo público no se presume, más aún ante la vigencia de la anterior Ley Nº 1561 por su incorporación al Digesto Jurídico.----------

------ En lo que refiere a la "carencia de toda otra acción", manifiestan que el carácter subsidiario surge ante la falta de una norma precisa que posibilite la reparación del perjuicio sufrido.----------

------ I.3. En el epígrafe "V -PLANTEOS DE INCONSTITUCIONALIDAD" argumentan sobre la declaración de inconstitucionalidad del art. 3 de la Ley Nº 5415 y del art. 2 de la Ley V Nº 66.----------

------ Pretenden dejar sin efecto aquel precepto porque derogó el art. 149 del Decreto Ley Nº 1561 que establecía el mismo "haber básico" para idénticas jerarquías de las dos agrupaciones que conforman la fuerza policial, fijándolo en distinto monto. Aseguran que se dispuso la diferencia "congelando" el de la Agrupación Servicios y manteniéndolo así "desde la sanción de la ley en crisis". Arguyen que esto provocó una verdadera desigualdad ante la ley y persiguen que se restablezca aquella igualdad.----------

------ Aluden a la estabilidad del empleado público, a su idoneidad y al *"ius variandi"* del Estado empleador. Sostienen que a este debe reconocérsele la posibilidad "ilimitada" de modificar unilateralmente las condiciones del contrato en función del interés público, pero que es un error considerar que esto no le provoque costo alguno o que el cocontratante no tenga derecho al mantenimiento de la ecuación económico financiera. Con cita de jurisprudencia de la Corte Nacional aducen que el Estado no puede alterar la sustancia del contrato o de la remuneración. Reconocen que existe la posibilidad de disminuir estas, pero que la alteración no puede ser sustancial. Comentan las condiciones que el Alto Tribunal admitió en los precedentes "Guida" y "Tobar" para reputar válida constitucionalmente una "reducción salarial": que sea temporaria, que exista un interés público que la justifique, que sea para el futuro y que no sea confiscatoria o arbitrariamente desproporcionada (remiten al primer precedente); que la medida sea razonable, limitada en el tiempo, un remedio, que no mute la sustancia o esencia de la relación jurídica y que esté sometida al control de constitucionalidad (se sustentan en el segundo fallo).----------

------ Toman el concepto de HABER MENSUAL del art. 147 de ese Decreto Ley. Refieren que en este ordenamiento, desde la creación de la institución y desde que se dispuso en aquel art. 149 hasta el 1° de octubre del año 2005, cuando se derogó este, fue idéntico el haber básico de la Agrupación Comando y de la Agrupación Servicios, en igual grado y jerarquía.----------

------ Entienden que la ley solamente diferenció a los dos agrupamientos mediante los suplementos particulares. Aluden a dos de éstos: Riesgo Profesional y Dedicación Especial. Describen que al establecer el primero se fijaron porcentajes diferentes para cada grupo y mayor para quienes pertenecen a la Agrupación

Comando; mientras que el segundo suplemento lo perciben estos últimos, aunque excepcionalmente puede acceder el resto de los policías. Se fundan en lo normado en los arts. 147, 150 primera parte y 151*in fine* del Decreto Ley N° 1561.----------

------ Argumentan respecto de la inconstitucionalidad del art. 3 de la Ley Nº 5415, que este es arbitrario porque establece una verdadera desigualdad ante la ley, atenta contra la manda del art. 16 CN, conculca sus derechos adquiridos desde el ingreso a la fuerza policial y afecta su propiedad amparada por el art. 17 CN.----------

------ Ello, pese a que se configuran "iguales circunstancias ante la ley", atento que ambas agrupaciones detentan el mismo "estado policial" durante las veinticuatro horas del día, lo cual implica que el personal que pertenece al Escalafón Servicios debe actuar ante cualquier contingencia o hecho que altere el orden público, en la misma condición que el del Escalafón Comando.----------

------ Aducen que existe una diferencia de trato "… como lo es el caso del congelamiento del haber básico del personal policial reclamante del Escalafón Servicios…" y que no tiene justificación objetiva o razonable.----------

------ Entienden que así se estableció una discriminación carente de fundamento, porque la diferencia estuvo siempre en los suplementos pero nunca en los sueldos básicos, sin dar razones suficientes.----------

------ Afirman que una de las formas de interpretar una norma, además de su letra, es la intención del Legislador y que es posible advertirla en su exposición de motivos, al presentarse el Proyecto de Ley o puede surgir del Debate Parlamentario al ser este presentado. Sin embargo, no consideran que en el Proyecto enviado por el Señor Gobernador proponiendo la norma en crisis, ni en lo debatido por los Diputados provinciales, esté expresada una razón que amerite o justifique la derogación en cuestión.----------

------ Fundan la inconstitucionalidad del precepto que la dispuso, en los arts. 14 bis, 16, 17, 18, 31, 33 y 75 inc. 23 de la Constitución Nacional y Tratados Internacionales.----------

------ I.4. Refieren también que todos los habitantes de la provincia gozan de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional y Provincial, con arreglo a las leyes que reglamentan su ejercicio. Mencionan que entre tales derechos se encuentra el de elegir y ejercer la profesión, oficio o empleo y que el trabajo es reconocido como un derecho social, garantizando la ley una retribución justa.----------

------ Adunan estos argumentos a la última parte de su pretensión, para justificar el planteo de inconstitucionalidad del art. 2 de la Ley V Nº 66, en tanto entienden que fija un límite salarial que restringe estos últimos derechos constitucionales. Interpreto que lo oponen para el caso de que esta Sala declare que les corresponden las diferencias salariales pretendidas y estas superen aquel límite.----------

------ Añaden otros argumentos en el título “VI-De la aplicación de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Comentan que el 11/11/10, en sentencia recaída en autos “Oriolo, Jorge Humberto...”,el Máximo Tribunal consideró de carácter “general, remunerativo y bonificable” las asignaciones establecidas para las Fuerzas Armadas y de Seguridad, entre ellas la Policía Federal Argentina, mediante el Decreto Nacional N° 2744/93 y los Decretos de Necesidad y Urgencia Nacionales N° 1255/05, 1126/06, 861/07 y 884/08, por lo que -según coligen- los aumentos así otorgados integran el haber mensual de los dependientes de aquella.--

------ Añaden que, en “Del Cioppo”, el mencionado Cuerpo puntualizó que la *ratio legis* del art. 54 de la Ley Nacional Nº 19101, al establecer que cualquier asignación que se otorgue al personal en actividad, cuando revista carácter general, se acordará en todos los casos, con el concepto de “sueldo”, fue evitar a futuro la sanción u otorgamiento de incrementos de haberes que posteriormente no se computaran a los efectos del retiro, criterio interpretativo mantenido en otros precedentes. Citan jurisprudencia.----------

------ Estiman los actores que este criterio jurisprudencial debe aplicarse al caso, a fin de determinar el mentado “88%”. Solicitan que se contemplen los porcentuales de los incrementos salariales fijados por los Decretos Nacionales N° 1255/05, 1126/06, 861/07, 884/08, 752/09, 1262/09, 883/10 y 927/11, los cuales totalizan, y de manera acumulada, más de un 130% de aumento salarial respecto de lo percibido a junio de 2005.Insisten en que deben considerarse “… esos porcentuales… regularizados por sentencia judicial…”.----------

------ I.5. Finalmente, citan jurisprudencia que refiere al plazo de prescripción quinquenal y decenal (arts. 4027 inc. 3, y 4023 del Código Civil, respectivamente).-

------ Fundan en derecho, ofrecen prueba, hacen reserva del caso federal y realizan petitorio de estilo.----------
-

------ II.1. Conferido el traslado de rigor, a fs. 236/254, contesta demanda la Provincia accionada. Solicita su rechazo con expresa imposición de costas y efectúa las negativas de estilo. Expresamente desconoce “…el anexo D, que supuestamente representa la escala salarial de la Policía Federal...”.----------

------ Luego de relatar sucintamente la pretensión de los actores, en el apartado “V.- FUNDAMENTOS DE LA IMPROCEDENCIA DEL RECLAMO”, inc.V.-1), “Derogación expresa de la norma citada”, aduce que el mismo no puede prosperar porque las normas en que lo fundan -arts. 147 y 149 de la Ley XIX N° 8- se encuentran derogadas por expresa disposición del Decreto Ley N° 1700/79 y por los que le sucedieron, a más de las leyes presupuestarias que han fijado nuevos regímenes y sucesivas escalas salariales a partir de 1983, en concordancia con lo prescripto por los arts. 1, 12, 14, 92, 135 (incs. 4, 5, 6 y 27) y 155 de la Constitución Provincial.----------

------ Recuerda que el Decreto Ley N° 1561/77 (Ley XIX Nº 8) fue dictado en el marco de un gobierno de facto en el cual las instituciones democráticas, en particular el Poder Legislativo, se encontraban suspendidas; y que el Ejecutivo

provincial de entonces, mediante el art. 147 *in fine*, delegó sus facultades para determinar el régimen salarial policial al Poder Ejecutivo Nacional, generando así un sistema de los denominados "enganches". Explica que encontrándose interrumpido el orden constitucional, tal delegación no encontraba el impedimento del actual art. 12 de la Carta Magna local, que hoy la fulmina con la nulidad absoluta. Advierte que el texto original del año 1957 también la prohibía (art. 40).-

------ Comenta que al poco tiempo el Decreto N° 1700, de fecha 28/3/79, deroga dicho régimen salarial e instituye uno nuevo para la Administración Pública Provincial, incluida la Policía de Chubut, al disponer: "Fíjense en los importes que se detallan en las planillas anexas que forman parte integrante de la presente, los sueldos básicos o remuneraciones adicionales que con..." (art. 1); y "El personal de Seguridad percibirá además de las remuneraciones fijadas en el Anexo XI de la presente Ley los adicionales y suplementos establecidos en el Capítulo III de la Ley 1561" (Capítulo X. Remuneraciones Personal Seguridad) (art. 47). Y que luego, en su Capítulo XIV, bajo el título Disposiciones Generales, señalaba: "Derogase toda otra norma legal que establezca regímenes de remuneraciones para los sectores de Personal dependiente de la Administración Pública Provincial o Municipal con excepción de los que se rigen por Convenios Colectivos de Trabajo" (art. 69). Dice que de este modo se asumió la facultad de acordar la política salarial que nunca debió delegarse.----------

------ Destaca que al Decreto Ley N° 1561/77 le siguieron innumerables leyes que fijaron nuevas escalas salariales a las que, a través de las sucesivas leyes presupuestarias, se les asignó el recurso necesario para afrontar el respectivo gasto, lo que representa una prueba objetiva, concreta y legal del derecho constitucional que tiene la Provincia de estipular la pauta salarial.----------

------ Y que también le sucedieron numerosas liquidaciones de haberes y sus correspondientes percepciones por parte de los agentes quienes no hicieron ningún tipo de reserva al respecto. Alega que en tanto nada reclamaron hasta el presente, reconocen su facultad de establecer el régimen de remuneraciones para la Policía provincial y que la misma no se halla delegada al Gobierno Nacional, como ahora pretenden. Ello demuestra -continúa- que la liquidación de sus estipendios siempre se sujetó a la normativa vigente, sin violentar ninguna ley, ni principio constitucional, ni mucho menos generar perjuicio patrimonial alguno.----------

------ Agrega que desde la entrada en vigencia de la Ley N° 5415, 01 de octubre de 2005, por el art. 3, quedaron derogados los arts. 149 y 152 del Decreto Ley N° 1561. Además, esta norma estableció que: "Los índices, asignaciones de jerarquías, porcentualidades, adicionales remunerativos y bonificaciones correspondientes al personal comprendido en el decreto ley 1561 se liquidarán conforme a los sueldos básicos fijados por la presente ley, a partir del 1° de Octubre de 2005" (art. 2). Entiende que en ella deben fundar su pretensión los actores ya que su operatividad es anterior al período reclamado.----------

------ En el subtítulo "V.- 2) APROBACIÓN DE LAS LEYES DE PRESUPUESTO DESDE EL AÑO 1977 A LA FECHA", apunta que la
Constitución Provincial impone que el presupuesto debe detallar los recursos previstos para hacer frente a todas las erogaciones de la administración (art. 135, inc.

4). Y que, en concordancia con dicho mandato, la Ley II N° 76 a más de fijar las pautas de los gastos que debe contener (art. 23), dispone: "Todo incremento del total del Presupuesto de Gastos previsto en el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo deberá contar con el financiamiento respectivo" (art. 26), que "Los créditos del Presupuesto de Gastos, con los niveles de agregación que haya aprobado el Poder Legislativo, según las pautas establecidas en el Artículo 23° de esta Ley, constituyen el límite máximo de las autorizaciones disponibles para gastos" (art. 27) y: "No se podrán adquirir compromisos para los cuales no queden saldos disponibles de crédito presupuestario, ni disponer de los créditos para una finalidad distinta a la prevista" (art. 31).----------

------ Manifiesta que se advierte así la importancia institucional que reviste el mismo como reflejo de las políticas de Estado, entre las que se inscribe la fijación de los salarios. Expresa que prueba contundente de ello es la existencia de diferentes normas por las que se han establecido diversos incrementos y nuevos montos para los suplementos creados por los arts. 153, 154 y 155 del Decreto Ley N° 1561, los que no fueron derogados.----------

------ Asegura que del juego armónico de la Ley Suprema Provincial con los arts. 147 y 149 del referido Decreto Ley, arts. 1, 47 y 69 del Decreto Nº 1700/79 y las sucesivas leyes especiales de aumentos y generales de presupuesto sancionadas con posterioridad, resulta claro que aquellos fueron derogados -insiste-, determinándose luego nuevas escalas salariales para los agentes policiales, como la citada Ley Nº 5415, por ejemplo.----------

------ Resulta evidente entonces -remarca- que los sueldos básicos del personal policial nunca fueron calculados en base al art. 147 *in fine* del Decreto Ley N° 1561/77, ni mucho menos incluido el cálculo del suplemento del art. 149.----------

------ En el punto "V.-3) DE LA DEROGACIÓN CONSTITUCIONAL DE LOS ARTÍCULOS 147° Y 149° DEL DECRETO LEY 1561/77", expone que como otro fundamento que avala el legal cumplimiento en la liquidación de haberes se encuentra el mentado art. 135, inc. 4, de la Carta Magna Provincial, en tanto establece que la falta de asignación de recursos a un gasto se fulmina con su derogación si el mismo no ha tenido principio de ejecución. Y que ello es lo que ha sucedido con la erogación que implicaba la aplicación de dicha normativa.----------

------ Resalta que desde el año 1977 a la fecha, ninguna de las leyes presupuestarias hace mención alguna a una partida relacionada con los gastos que pudiere generar el Decreto Ley invocado por los actores por lo cual interpreta que, conforme la citada manda constitucional, los arts. 147 y 149 han quedado plenamente abrogados.----------

------ Afirma que al tratarse de una ley especial debe someterse a las previsiones del citado texto constitucional y a la Ley Provincial de Administración Financiera N° 5447.----------

------ Concluye así que dicha norma no tiene vigencia, eficacia ni fuerza ejecutoria, por lo que resulta inaplicable; y que no ha engendrado derechos en sus destinatarios ni obligaciones para el Estado provincial.----------

------ Comenta que la mayoría de los actores han ingresado a partir del año 1990, con la vigencia de las nuevas escalas salariales fijadas por el Ejecutivo Provincial con acuerdo Legislativo, lo que excluye la aplicación de fórmula alguna para la determinación de sus remuneraciones. Estima que derogada la norma por aplicación de la propia Constitución Provincial y consentida por los demandantes la facultad del Estado Provincial de estipular las pautas salariales, el reclamo impetrado deviene extemporáneo e improcedente.---------- Explica además que la derogación de una norma puede ser expresa o tácita y que, como una variante de esta, se encuentra la "orgánica" que se produce cuando la aplicación de una determinada norma legal resulta incompatible con las consecuencias jurídicas derivadas de la entrada en vigencia de un nuevo régimen.--

------ De tal modo, entiende que estamos frente a dos tipos de derogaciones del Decreto Ley N° 1561/77: una expresa, toda vez que el N° 1700/79 deroga toda norma legal que establezca regímenes de remuneraciones; y una tácita, en tanto la Constitución de la Provincia considera derogada la ley que no ha tenido una asignación de recursos necesaria para afrontar su cumplimiento.----------
-

------ Por otra parte, menciona que por aplicación del principio "lex posteriori derogat priori" resulta abiertamente expuesta la incompatibilidad entre lo reclamado por los actores y las sucesivas leyes que han determinado nuevos aumentos salariales.----------

------ En el parágrafo "V.-4) INAPLICABILIDAD AL SUB LITE DEL PRECEDENTE "ORIOLO" DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN", sostiene que el fallo invocado por los actores es inaplicable aún cuando se considerase vigente el sistema de los arts. 147 y 149 del Decreto Ley N° 1561/77. Expone que los accionantes entienden que dicho precedente incorporó al haber mensual de los agentes de la Policía Federal, como remunerativas y bonificables, las sumas otorgadas mediante los Decretos N° 2477/93, 1255/05, 1126/06, 861/07, 884/08 y 752/09, las que fueron expresamente determinadas como no remunerativas y no bonificables por el Poder Ejecutivo Nacional.----------

------ Estima que la aplicación o extensión de los efectos de la referida sentencia le son inoponibles, toda vez que se circunscriben en forma acotada al caso particular para la cual se ha dictado. Comenta que las resoluciones judiciales poseen un efecto restringido e *inter* partes y que dejan subsistente la vigencia de la normativa implicada en la controversia sometida a la jurisdicción.----------
-

------ Finalmente subraya que la normativa derogada, que la contraria trae como "piedra de toque" de su pretensión, fue incorporada al Digesto Jurídico de la Provincia, como en otro tantísimos ordenamientos que no mantienen vigencia, con carácter ordenatorio y técnico, mas no "resancionatorio" o como parte del sistema positivo. Expresa que de adjudicarse carácter "sancionatorio" a dicha circunstancia, opera la cortapisa irrefragable del art. 135 de la Constitución Provincial en el sentido ya analizado.----------

------ II.2. En el apartado “VI - Improcedencia palmaria de la acción de inconstitucionalidad”, la demandada responde que es un “dislate” el planteo de inconstitucionalidad del art. 3 de la Ley Nº 5415 por colisionar con normas derogadas y ello bajo el mismo sistema jurídico que aquella integra.----------

------ En las negativas rechaza que esa norma sea inconstitucional, que haya brindado un trato discriminatorio y arbitrario, estableciendo un privilegio de un grupo, esto es a favor de la Agrupación Comando, de manera arbitraria y que el Legislador haya “inobservado la regla de la razonabilidad” con aquella disposición. Niega que se afectara la propiedad y su sustancia, el principio de igualdad ante la ley y que se violase el “estado policial”. No profundiza ninguna de éstas.---------- Argumenta mínimamente en defensa de la constitucionalidad de aquel precepto e intenta que se considere infundado el planteo de inconstitucionalidad por colisionar con los arts. 16, 17, 18, 31, 33 y 75 inc. 23 de la Constitución Nacional y Tratados Internacionales y en nada más que “tres carillas”. Acusan que no guarda los recaudos mínimos de fundamentación, apoyándose en jurisprudencia de esta Sala, que transcriben, y de la Corte Nacional.----------

------ Critica que luego de haber consentido los actores por seis años la “operatividad” del precepto cuestionado y por décadas el “standard legal”, hoy lo someten “a semejante imputación”, pese a ser la *última ratio* del orden jurídico y sin intentar siquiera un “reclamo administrativo oficioso”.----------

------ Concluye que lo que pretenden los actores es desarticular políticas de retribución de servicios cuya valoración no corresponde al Poder Judicial.----------

------ Por otra parte, indica que el art. 2 de la Ley V N° 66 establece un límite a las remuneraciones de los agentes de la administración en general, las que no podrán superar la percibida por el señor gobernador; y que dicho tope responde a la realidad económica financiera de la provincia. Entiende que tratándose de una relación de empleo público provincial, esta debe someterse a la normativa local, sin implicar avasallamiento de derecho alguno.---------- ----- Hace reserva del caso federal, ofrece prueba y realiza petitorio de estilo.------

------ III.- A fs. 390/391, los actores solicitan se agregue como “nuevo documento” a los presentes, la respuesta dada por la Honorable Legislatura Provincial al Oficio N° 13/SCA/15, librado en los autos: “Farías P., Alejandro…” (Expte. N° 23113 -F-2013), en trámite por ante este Tribunal.----------

------ Por SI. N° 107/SCA/15 se hace lugar a lo peticionado, incorporando al proceso la prueba arrimada por la actora, en tanto se relaciona con cuestiones ventiladas en autos. Asimismo, se hace saber que será valorada oportunamente al momento del dictado del fallo definitivo, de conformidad con lo prescripto por el art. 390 del CPCC (fs. 401/402).----------

------ IV. La prueba producida por las partes es documental, informativa y pericial contable. Los actores acompañaron documental con la demanda: copias de sus DNI, algunos recibos de haberes y reclamos administrativos, copia de un informe producido en autos “Borsella…” (Expte. N° 22306-B-2011), así como de la

Exposición de Motivos, Debate Parlamentario y Ley N° 5415 (fs. 3/196); y la ofrecida con el escrito de ampliación de demanda, admitida a fs. 224 y constancia de fs. 260. También la ofrecida en poder de la demandada, la reservada en Secretaría a fs. 259 y 304, y la agregada a fs. 264/302. Solicitaron además, y se tuvo presente, la prueba informativa producida en los autos: "Borsella..." (Expte. N° 22306 -B-2011). Además, se admitió la obrante a fs. 386/389 vta., por SI N° 107/SCA/15. A fs. 316/361 y vta. obran copias certificadas de contestaciones a oficios por esta Sala del Superior Tribunal. A fs. 372/376 consta pericia contable (se acordeló un cuadernillo en 190 fojas). A fs. 379 la demandada solicita explicaciones, las que no son contestadas. Por su parte, la Provincia accionada aportó la documental individualizada en el responde (legajos personales, recibos de haberes de los actores en CD, escalas salariales, leyes y decretos provinciales), la que se ordena reservar en Secretaría a fs. 259 y 304**.**----------

------ V. La actora presentó su alegato a fs. 410/421 mientras que la demandada no hizo uso de este derecho.----------

------ VI. El señor Procurador General emite su dictamen a fs. 423/424. Recuerda que ya se expidió en casos análogos, como en el Dictamen N° 74/13, donde propiciaba el rechazo de las demandas porque los artículos de las leyes citadas carecían de vigencia. Advierte que ese fue el criterio de este Cuerpo en la Sentencia Definitiva N° 4/SCA/15.----------

------ Agrega que el informe que obra en autos, elaborado por el Director del Digesto Jurídico, no tiene gravitación alguna en la decisión. Estima que, a tal fin, debe considerarse la interpretación y aplicación de las normas efectuadas por este Superior Tribunal, por ser el órgano constitucional competente cuando se discute la vigencia de un derecho en un caso concreto.----------

------ Observa que es distinta la situación en lo referido a la liquidación del rubro antigüedad, pues el texto original que reproduce el Digesto se ha mantenido invariable desde su sanción. Indicó que, verificado que fuera a partir de las pruebas obrantes en autos que la administración no ha incluido en la base del cálculo la totalidad de los adicionales que corresponden, el reclamo resulta procedente. Transcribe parte del voto del Dr. Pasutti pronunciado en aquel fallo.----------

------ En lo que respecta al planteo de inconstitucionalidad del art. 3 de la Ley N° 5415, afirma que este no puede prosperar. Dice que los actores acusan la violación del principio de igualdad cuando lo que ha hecho la Honorable Legislatura, en ejercicio de competencias constitucionales propias, ha sido aplicarlo en función de las necesidades que demandaba el cumplimiento del servicio público de seguridad ciudadana. Así -continúa- la diferenciación de los básicos por agrupación (sea Servicios o Comando), no implicó una reducción de salarios para ningún agente sino un ajuste razonable de los haberes para aquellos que cumplen funciones diferentes. Concluye que se materializó la aplicación del principio de igual remuneración por igual tarea mediante una diferenciación salarial; pero sin afectar derecho alguno. Expone que en este sentido se ha pronunciado la Sala en la sentencia definitiva antes citada.----------
-

------ VII.- A fs. 425 se llaman autos para sentencia. A fs. 427 se integra el Tribunal con los señores Ministros, Dres. Mario Luis Vivas, Miguel Ángel Donnet y Marcelo A. H. Guinle. Consentida esta, a fs. 430 se realiza el sorteo correspondiente para la emisión de los respectivos votos.----------

----- **VIII.- ANÁLISIS**.----------

------ Conforme surge de los antecedentes expuestos, el caso que viene a decisión de esta Sala guarda sustancial relación con los precedentes emanados en las sentencias definitivas 4, 10, 12, 13 y 21/SCA/15, entre muchas otras. Esta advertencia preliminar me permite adelantar, además, que por compartirlos plenamente, haré remisión a algunos de los fundamentos dados en esos decisorios. ------ A. La demanda en estudio contiene distintas pretensiones vinculadas con el régimen salarial policial provincial. Una de ellas la constituye el requerimiento de adecuación del haber mediante el sistema de enganche que consideran se encuentra vigente y establecido por el artículo 147 in fine (o segundo párrafo) de la Ley XIX N° 8. Por la otra pretenden que se abonen los rubros "zona" y "antigüedad" conforme lo previsto en el artículo 149, primer párrafo y primer párrafo in fine, respectivamente, de ese texto legal. A modo preventivo y en forma genérica, solicitan que se declare la nulidad o ilegitimidad de todo acto administrativo que hubiera decidido no aplicar tales normas.----------

------ Por último peticionan que se declare la inconstitucionalidad el artículo 3 de la Ley N° 5415, para que, ulteriormente, se restablezca la igualdad de los haberes básicos del escalafón servicios, equiparándolos con los haberes básicos del escalafón comando. Extienden la petición de inconstitucionalidad al artículo 2 de la Ley V N° 66, en cuanto fija un límite salarial que restringe los derechos constitucionales pretendidos.----------

------ En todos los casos reclaman las diferencias salariales con retroactividad a los períodos no prescriptos, y el restablecimiento de la liquidación de los rubros pretendidos hacia el futuro.----------

------ La demandada asienta su responde, para proponer el rechazo de la acción, en la derogación de las normas base del reclamo. Así, alude a distintas leyes dictadas con posterioridad al Decreto Ley N° 1561/77 (anterior denominación de la Ley XIX N° 8). En principio sostiene la derogación expresa por parte del Decreto Ley N° 1700/79, y asevera que los sucesivos regímenes salariales fijaron escalas que evidencian que esas normas se encuentran derogadas. Se explaya en particular sobre la Ley N° 5415, y el efecto derogatorio que atribuye a su artículo 3. Añade a lo dicho la derogación constitucional por aplicación del artículo 135 inciso 4 de la Carta Magna provincial, y las sucesivas leyes de presupuesto dictadas desde aquellos años. Considera que debe aplicarse el principio *"lex posteriori derogat priori"*.----------

------ Repele luego el ataque de inconstitucionalidad contra la Ley N° 5415 por entender que los actores consintieron su aplicación durante décadas y no exponen fundamentos suficientes en su pretensión, que habilite el tratamiento

constitucional.----------
-

------ B. Las pretensiones fundadas en la aplicación de los artículos 147 segundo párrafo y 149, primer párrafo in fine (rubro zona), en tanto sus textos se encuentran reproducidos en el Digesto Jurídico provincial, exigen que para dilucidar la cuestión, deba analizar la vigencia de estas normas.----------

------ Es que, como explicaron los Ministros y ex Ministros que en diferentes composiciones integraron el Tribunal, en nuestra provincia, desde hace una década, a fin de subsanar el problema de la abundancia y superposición de normas, se decidió ordenarlas, depurarlas y darlas a publicidad, para favorecer, además, su conocimiento por el ciudadano.----------
-

------ Quienes se encontraban a cargo de su elaboración debían ceñirse a las técnicas legislativas fijadas en el artículo 4 de la Ley V N° 98 (ex Ley N° 5199, BO. del 26/07/04). Según esta norma, consistían en la recopilación (clasificación, depuración, inventario y armonización de la legislación vigente y un índice temático ordenado por categorías), la unificación (importa la refundición de un solo texto legal o reglamentario de normas análogas o similares sobre una misma materia o temática, señalando al pie la referencia normativa correspondiente) y la ordenación (traduce la aprobación de los textos ordenados compatibilizados en materias varias veces reguladas y/o modificadas parcialmente).----------

------ Si bien ha de reconocerse la ardua tarea que implicó plasmar aquel cuerpo jurídico, que comenzó definitivamente a regir desde el 2 de enero de 2009 (conf. Ley N° 5749), tamaña obra no es infalible. ----------

------ Digo esto pues la vigencia de los artículos 147, segundo párrafo y 149, primer párrafo in fine de la Ley XIX N° 8 es la que suscita esta parte de la controversia de autos y sobre la que esta Sala debe expedirse. Este es el argumento que trae la Provincia para repeler la acción, y que alerta respecto de la derogación de ambos preceptos con anterioridad a la entrada en vigencia del Digesto Jurídico provincial.-
----

------ Según surge de la lectura del artículo 147, segundo párrafo de ese régimen policial, este precepto establece la forma en que debe calcularse el denominado “haber mensual” y prescribe que no podrá ser inferior al 88% de los haberes que las autoridades nacionales fijasen para los agentes de la policía federal, en igual jerarquía a la del policía local.----------

------ El texto proviene del primitivo artículo 148, segundo párrafo del Decreto Ley N° 1561 del año 1977, normativa reguladora del régimen policial.----------

----- Pero cabe considerar que a escasos dos (2) años de dictado ese Decreto Ley, mediante el Decreto Ley N° 1700 del año 1979, se instituyó otro sistema de liquidación de haberes de la policía local dentro de un régimen destinado a los empleados públicos provinciales.----------

------ Verifico lo expuesto en los artículos 1, 47, 69 y el Anexo XI del Decreto Ley N°1700/79 (BO 30/5/79). Del texto del artículo 1 interpreto que fija, mediante el sistema de planillas anexas a la norma, el salario básico de los empleados policiales. Dispone también que aquellos resultan "modificados en la forma establecida en los correspondientes anexos". Luce clara la voluntad de la Autoridad Provincial de establecer por sí el haber básico de sus dependientes.----------

------ En concordancia con lo dicho, en el capítulo X - "Remuneraciones Personal de Seguridad", en el artículo 47, se hace remisión al Anexo XI, que contiene la escala de haberes de las distintas jerarquías y fija un básico para cada una.----------

------ Coherente con el nuevo sistema instituido, el artículo 69 dispone que se deroga toda norma que establezca regímenes de remuneraciones. Encuentro aquí una derogación expresa de estos últimos, que incluye y abraza al primigenio artículo 148 segundo párrafo del Decreto Ley N° 1561/77 (hoy artículo 147 segundo párrafo de la Ley XIX N° 8), cuyo sistema de enganche no se reproduce en el régimen del Decreto Ley N° 1700/79.----------

------ Así también lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando advierte: "…Tratándose de leyes sucesivas que legislan sobre la misma materia, la omisión en la última de disposiciones de la primera, cuando la nueva crea en la cuestión de que se trata un sistema completo, importa seguramente dejarlas sin efecto, máxime cuando, de lo contrario, adquirirían éstas un alcance distinto a aquel para el que fueron sancionadas…" (Fallos: 302:1570).----------

------ C. Idéntica respuesta encuentro para el reclamo que se funda en el artículo 149 primer párrafo in fine de la Ley XIX N° 8, que en el Decreto Ley N° 1561/77 llevaba el número 151.----------

------ Los accionantes consideran que este ítem, denominado zona o zona patagónica, debe ser liquidado con independencia del importe que perciben en virtud de la Ley I N° 355 (antes Ley N° 5718). Los artículos 5 y 6 de esta norma establecen "…a partir del 1° de Marzo del año 2.008 un adicional no remunerativo y no bonificable … en concepto de zona…". En ambos casos, dispusieron que este ítem se abonaba en un monto fijo para todos los agentes de la Administración Pública Central, Organismos Descentralizados y Autárquicos.----------

------ Sin embargo, como ya he explicado en el transcurso de mi voto, cuando una norma instaura un sistema diferente e inconciliable con otro anterior importa dejarlo sin efecto, perdiendo vigencia a partir de ese momento. Es lo que entiendo ocurre con el sistema de pago del adicional zona, para el cual se mutó de un mecanismo de liquidación porcentual a otro establecido en una suma fija.----------

------ Lo expuesto en tanto los actores, pese a requerir que se interprete que se trata de dos rubros salariales diferentes, no han acreditado que el fundamento para el pago de la zona se asiente en circunstancias que, merituadas de forma distintas, lleve a la Administración a abonar dos ítems por un mismo concepto.----------

------ D. Conforme el análisis que he realizado concluyo que ambas normas que fundan esta parte de la pretensión se encontraban derogadas y no debieron ser

reproducidas por el Digesto Jurídico. Según se ha dicho en los precedentes de esta Sala "…ese efecto no cesó con la publicación del Digesto Jurídico en enero de 2009…", ya que cualquier modificación legislativa requería la sanción de nuevas leyes, lo que no constato en el caso.----------

------ E. Por lo dicho, descarto la interpretación que se aduna a través del informe de la Oficina del Digesto Jurídico que obra a fs. 386/389 vta., la que no conmueve el razonamiento que he expuesto y que me lleva a proponer al Acuerdo el rechazo de estas pretensiones fundadas en los artículos 147, segundo párrafo y 149, primer párrafo in fine de la Ley XIX N° 8. Así lo voto.----------

------ F.1. Me avoco ahora a la pretensión dirigida a obtener un decisorio que condene al Estado Provincial, empleador de los actores, al pago de las diferencias salariales que estos entienden les corresponde por la errónea liquidación en sus haberes del rubro "antigüedad".----------

------ Así lo piensan, en tanto interpretan que el artículo 149, primer párrafo de la Ley XIX N° 8, establece que el cálculo de aquel lo será sobre "…la asignación total del cargo" que ostentan. Por lo que deducen que el ítem debe incluir en su base de cálculo otros adicionales no contemplados por la Administración policial al momento de liquidarlos. Aseveran que esta yerra cuando solo incluye los rubros "sueldo básico" y "adicional riesgo profesional" a tal fin.----------
----- Como ya dije al tratar los otros reclamos, el fundamento para el rechazo de la demanda que esboza la Provincia del Chubut se circunscribe a la derogación del precepto, por distintas normas posteriores. Asevera también que el artículo 149 de la Ley XIX N° 8 fue derogado en forma expresa por la Ley N° 5415, por lo que el Estado provincial ha cumplido correctamente con la liquidación de haberes.---------

------ F.2. Sobre los argumentos de las partes y el Decreto N° 1453/15.----------

------ Después de trabada la *litis*, con fecha 08 de octubre del año 2015, el Poder Ejecutivo Provincial dicta el Decreto N° 1453/15 (BO del 9 de noviembre de 2015, N° 12316). Por esta norma se autoriza al Señor Ministro de Economía y Crédito Público a liquidar el Suplemento por Antigüedad establecido en el artículo N° 149 de la Ley XIX N° 8 conforme al Anexo A de ese Decreto.----------

------ A su vez, en el Anexo A se establece que el cálculo del Suplemento por Antigüedad (2%) incluirá en su base a los siguientes ítems: Básico – Suplemento por Riesgo Profesional (art. 150 Ley XIX N° 8) – Presentismo (art. 149 bis Ley XIX N° 8) – Suplemento por Responsabilidad Funcional (art. 152 Ley XIX N° 8) – Adicional Remunerativo No Bonificable (art. 11 Ley I N° 407) – Adicional No Remunerativo No Bonificable (art. 6 Ley I N° 512) – Suplemento por Dedicación Especial (art. 151 Ley XIX N° 8) – Suplemento por Asignación Especial (art. 151 Ley XIX N° 8).----------

------ Entre los Considerandos del Decreto puede extraerse que en el expediente en el que tramitara su dictado (el que no se ha acompañado) obra agregada copia de una sentencia emanada de este Superior Tribunal, por la que se fija el criterio interpretativo a seguir en relación a la liquidación del Suplemento por Antigüedad establecido por el artículo N° 149 de la Ley XIX N° 8.----------

------ Entonces, de la mera lectura del Decreto Nº 1453/15, se advierte que ya no existe aquella primigenia discusión sobre la vigencia de la norma que establece dicho suplemento y ni siquiera sobre la forma de liquidarlo. Queda claro allí que el Estado Provincial adoptó el criterio expuesto por este Superior Tribunal en los numerosos precedentes desarrollados sobre el tema en cuestión y extendió los efectos de las sentencias dictadas en causas particulares a todos los empleados policiales.----------

------ Dicho ello, toda exposición sobre el punto deviene infructuosa, en tanto el debate fue cerrado por el propio Poder Ejecutivo provincial, al ordenar readecuar la forma de liquidar los haberes de los empleados policiales con el dictado del Decreto N° 1453/15. Esto, conforme la unívoca interpretación de la norma vigente efectuada por el Superior Tribunal, desde anteriores integraciones (cfr. SD. Nº 21/SCA/15, 09/SCA/16, 103/SCA/16, 110/SCA/16, 113/SCA/16, 116/SCA/16, 117/SCA/16, entre muchísimas otras). Solo el ítem "Zona" no ha sido contemplado en el Decreto mencionado pero encuentro que su omisión se justifica válidamente en que este rubro debió incluirse en la base de la antigüedad hasta el 30 de septiembre del año 2012, como fue expuesto en los abundantes decisorios sobre el tema.----------

------ No obstante la cuestión no ha devenido abstracta, pues tengo presente el alcance de la pretensión y que en esta *litis* los actores han denunciado la omisión de calcular el rubro antigüedad sobre todos los adicionales mencionados en las reiteradas sentencias definitivas. Esta irregular actuación se corrobora con los recibos de haberes de quienes demandan, que tengo a la vista, agregados como prueba.----------

------ La señalada omisión administrativa que motivó a demandar generó, en favor de los accionantes, diferencias salariales por la errónea liquidación de haberes; las que considero deben ser reconocidas por los períodos no prescriptos y hasta que se verifique la aplicación efectiva en la liquidación de aquellos del Decreto Nº 1453/15.----------

------ En cuanto a las diferencias salariales no prescriptas, corresponde establecer que, atento la jurisprudencia de la Sala, y la interpretación armónica de los artículos 2537 y 7 del Código Civil y Comercial, el plazo a aplicar es el de cinco (5) años, conforme lo previsto en el artículo 4027 inc. 3 del Código Civil, y por tal período han de ser reconocidas.----------

------ De este modo, y por los fundamentos dados, propongo al Acuerdo hacer lugar a la demanda impetrada y, tal como se hiciera en los precedentes a los que el Poder Ejecutivo se ciñó, ordenar a la Administración que proceda a recalcular el suplemento "antigüedad" de manera que se incorporen los siguientes rubros a la base que se toma para liquidar aquel. Esto, en la medida en que se acredite la percepción por los actores de cada uno de los mencionados, durante la relación de empleo público, y desde los cinco años anteriores a la demanda: a. Presentismo, b. Responsabilidad funcional, c. Zona, hasta el 30 de septiembre del año 2012, d. Adicional remunerativo no bonificable del Código 1195, e. Adicional no

remunerativo no bonificable del Código 1872, f. “Dedicación Especial” y “Asignación Especial” (estos desde el 1 de Enero de 2015).----------

------ Por lo expuesto, propongo al Acuerdo hacer lugar a la demanda y condenar al Estado Provincial a abonar las diferencias salariales reclamadas, que surgirán para cada actor de las liquidaciones individuales que, por los períodos que en cada caso correspondan, se practiquen en la etapa de ejecución. Así lo voto.----------

------ G. La restante pretensión traída a conocimiento de la Sala involucra la declaración de inconstitucionalidad del artículo 3 de la Ley Nº 5415 para, de este modo, restablecer la igualdad que invocan entre los haberes básicos de los integrantes de la Agrupación Servicios con los de la Agrupación Comando, y el consiguiente pago de diferencias salariales. Sostienen que al producirse la derogación del artículo 149 del Decreto Ley N° 1561/77, se conculcaron principios de raigambre constitucional.----------

------ Aseveran que el artículo 147 de la Ley XIX N° 8 establece el haber mensual sin hacer distinción entre las Agrupaciones Comando y Servicios, y que hasta el 01 de octubre del año 2005 se mantuvo idéntico sueldo básico para ambos escalafones, en igualdad de jerarquía y grado del personal policial. Puntualizan que así se hizo siempre, desde la creación de la Institución hasta el dictado del artículo cuestionado, por el que se aumentó el sueldo básico de la Agrupación Comando, “congelando” el de la Agrupación Servicios.----------

------ Achacan a la norma la violación de los artículos 14 bis, 16, 17 y 18 de la Constitución Nacional, y solicitan que este Tribunal declare la inconstitucionalidad peticionada y se admita el pago de las diferencias salariales desde que cada suma fue debida y con retroactividad a los períodos no prescriptos.----------

------ La defensa estatal sostiene a ultranza la constitucionalidad del precepto en crisis.----------

------ H. La cuestión controvertida implica verificar si la norma cuestionada efectivamente conculca -sin que exista razón que lo justifique- los derechos mencionados por los actores, y para el hipotético caso de obtener un resultado favorable a esta pretensión, corresponderá ingresar en el campo de las diferencias reclamadas.----------

------ Ello, a pesar que con la sanción de la Ley I N° 512 (BO 1/1/14) se retornó al sistema anterior al establecido por la norma atacada, cuando se equiparó nuevamente el sueldo básico de ambos Agrupamientos. Así lo ha interpretado la Corte Nacional cuando consideró que “…el recurrente mantiene interés en la definición legal de su situación en razón de que, durante todo el período por el que formula el reclamo indemnizatorio, su derecho se encontraba regido por la normativa derogada, pues cabe admitir la virtualidad de dictar pronunciamiento en circunstancias en que el cambio del marco fáctico o jurídico determina la ausencia de utilidad del fallo hacia el futuro, siempre que subsista el interés de las partes por los efectos jurídicos producidos durante el lapso anterior a esa variación (Fallos 332:2043). Es lo que ocurre en autos, ya que los actores pretenden las diferencias salariales que entienden devengadas durante el período de vigencia de la norma.-

------ Tras lo dicho, he de coincidir con la Corte Suprema de Justicia de la Nación en que la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico, por lo que no cabe efectuarla sino cuando la repugnancia del precepto con la cláusula constitucional invocada sea manifiesta, y requiere de manera inexcusable un sólido desarrollo argumental y la demostración de un agravio en el caso concreto. Además, se la ha reconocido como una de las más delicadas funciones del Poder Judicial (Fallos 339:1277 y 338:1504).----------

------ Es por ello que quien pretenda debatir la constitucionalidad de un precepto debe efectuar una descripción precisa, clara y concreta de la lesión que aquel le provoca y acreditar que no se trata de una limitación razonable a los derechos que alega conculcados. La Constitución Nacional no consagra derechos absolutos, insusceptibles de razonable reglamentación (arts. 14 y 28) y la constitucionalidad de dicha reglamentación está condicionada, por una parte, a la circunstancia de que los derechos afectados sean respetados en su sustancia y, por la otra, a la adecuación de las restricciones a las necesidades y fines públicos que las justifican, de manera que no aparezcan infundadas o arbitrarias, sino razonables, es decir, proporcionadas a las circunstancias que las originan y a los fines que se procuran alcanzar con ellas. (Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite, Fallos 338:1444).----------

------ I. Bajo tales premisas ingreso al examen de la ley que contiene el precepto controvertido, cuyo texto es ciertamente conciso, pues -en lo que aquí interesa- dispone la derogación expresa del artículo 149 del Decreto Ley N° 1561/77. Este último establecía que el sueldo básico correspondiente a cada grado de la carrera policial sería igual para idéntica jerarquía en todos los cuerpos y escalafones.----------

----- El antecedente normativo se origina con el Proyecto de Ley N° 191/05, por el que el Poder Ejecutivo lo eleva a la Honorable Legislatura provincial, en el que expresamente aclara: "…Si bien es cierto que el Proyecto deroga conceptos y rubros salariales vigentes, fijados tanto por el artículo 152° del Decreto Ley 1.651, como por los párrafos 1° y 2° del artículo 6° de la Ley N° 5.210, se ve incrementado el básico en cada categoría, por lo cual no existiría disminución alguna en los haberes del Personal Policial…".----------

------ A la par, el artículo 4 de la Ley N° 5415 -no cuestionado- dispuso que las bonificaciones y suplementos derogados por los artículos 1 y 3 serían absorbidos por el aumento salarial dispuesto a través de la propia ley. Entonces, puedo descartar la alegación de una disminución o congelamiento salarial, sobre la cual se sustenta la demanda de inconstitucionalidad, ya que el texto normativo no ofrece dudas, que ambos agrupamientos policiales recibieron un incremento en el sueldo básico. No encuentro aquí violación del derecho de propiedad.----------

------ Los restantes argumentos, en tanto se encuadran en los arts. 14 bis y 16 de la Carta Magna Nacional, me inducen a referirme al principio de igual remuneración por igual tarea, apenas esbozado en la acción cuando esgrimen el trato desigual en las remuneraciones, pese a que ambos agrupamientos revisten estado policial y se encuentran en igualdad de condiciones.----------

------ El art. 16 de la Constitución de la Nación establece que “Todos sus habitantes son iguales ante la ley...”. La noción de “igualdad jurídica” -reiteradamente referida por doctrina y jurisprudencia- exige que se trate del mismo modo a quienes se encuentran en iguales situaciones y por ello, implica el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias.----------

------ Nuestra Constitución garantiza un respeto y trato igualitario por parte de la ley. Señala Gregorio Badeni que “…la igualdad jurídica consiste en que la ley debe ser igual para todos los iguales en igualdad de circunstancias, y que no se pueden establecer privilegios que concedan a unos lo que se niega a otros bajo las mismas circunstancias. Así la igualdad supone la distinción razonable entre quienes no se encuentran en la misma condición porque lo contrario sería legalizar la desigualdad” (Tratado de Derecho Constitucional, T° 1 pág. 354, editorial La Ley, edición año 2004).----------

------ Llevado lo expuesto al ámbito de la relación de empleo, estimo que “…El sentido final que se persigue es que el importe remuneratorio no se vea afectado por una calidad genérica de quien lo cumple, sexo, raza, edad, estado civil, religión, etc., sino por las diferencias objetivas de la tarea e incluso las aptitudes o condiciones personales de quien la realiza…el problema está en encontrar válidas y no discriminatorias pautas objetivas de medición, por las que se pueda determinar, al menos aproximadamente, la igualdad de remuneración en los empleos, tanto dentro de una misma industria o actividad, como en tareas similares de distintas actividades, profesiones u oficios. (Julio J. Martínez Vivot; Los principios de igual remuneración por igual tarea y por trabajo de igual valor; http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/47/los-principios- de-igualremuneracion -por-igual-tarea-y-por-trabajo-de-igual-valor.pdf).----------
---------- En particular referencia al régimen policial de la provincia, considero pertinente verificar si nos encontramos en presencia de la alegada identidad de situaciones que impida un tratamiento desigual -en punto a la remuneración- entre los integrantes de los Escalafones Comando y Servicios. Para el supuesto de considerarlos iguales, la distinción operada por la norma se tornaría arbitraria e inconstitucional.----------

------ Si bien quienes accionan sostienen que el Agrupamiento Servicios realiza similares tareas a los del Agrupamiento Comando, la lectura de la Ley XIX N° 8 me persuade de lo contrario.----------

------ Atiendo a las funciones y deberes fijados en esa ley, que implican distinciones objetivas y que, a la par, otorgan trato diferente a ambos Agrupamientos a lo largo de todo el régimen policial. A saber: ----------

- el artículo 18 de la Ley XIX N° 8 dispone: “Atento a las funciones específicas que el personal policial está llamado a desempeñar en los servicios de la institución, será ubicado en agrupaciones…”.----------

-el artículo 20 prevé que el personal de la Agrupación Servicios “…podrá ser transferido a la Agrupación Comando, previa realización de cursos de capacitación, cuando mediare razones operacionales de la Institución, así lo requieran….”.--------

-el artículo 25 manda: "…El comando de las unidades operativas Policiales será ejercido integral y exclusivamente, por personal de la Agrupación Comando, Escalafón General. La sucesión se producirá en forma automática, siguiendo el orden jerárquico y antigüedad entre los integrantes de dicho Escalafón…".----------

-el artículo 31 impone la siguiente restricción: "… El personal superior de la Agrupación Comando, con funciones directivas en una Unidad Operativa u organismo de la institución, no podrá ejercer contemporáneamente profesiones liberales".----------

------ Las normas transcriptas son solo una ínfima parte de las diferencias entre ambos agrupamientos que surgen del propio estatuto policial, a cuya lectura invito para no cansar al justiciable.----------

------ Por ello, considero que los actores yerran cuando interpretan que se encuentran en igualdad de condiciones, lo que he corroborado con la sola referencia normativa al régimen legal.----------

------ Entonces el legislador pudo tratar de forma distinta a ambos agrupamientos cuando decidió otorgarles básicos diferentes y derogar el artículo 149 del Decreto Ley N° 1561/77, pues se encontraba facultado a atender la diversidad de circunstancias instituidas en el propio régimen policial. Las distinciones objetivas señaladas permiten valorar de modo diferente aquellas tareas a las que el Poder Ejecutivo y los Legisladores pretendieron recompensar con un sueldo básico superior, las del Agrupamiento Comando. Además, tengo en cuenta el contexto socio económico, de extrema gravedad, al tiempo de su sanción, que se configuró en esta provincia (de público conocimiento), y al que se hizo referencia en el debate parlamentario (sesión N° 31 del 25 de octubre de 2005). Lo dicho surge claramente descripto en este último en palabras de los propios señores Diputados: "…los incidentes ocurridos en el ámbito de la provincia… policías que se encontraban acuartelados en la ciudad de Comodoro Rivadavia…" (Dip. Touriñan); "… no podemos dilatarlo mucho debido a la complejidad del problema social que esto acarrea…" (Dip. González) y "…trata de dar una solución, aunque no definitiva, al conflicto con la Policía de la Provincia del Chubut…" (Dip. Morelli).----------

------ J. De este modo, entiendo que la norma supera el examen de constitucionalidad solicitado, y que no hay violación a los artículos 14 bis, 16, 17 y 18 de la Constitución Nacional. Esta pretensión debe ser rechazada. Así lo propongo al Acuerdo y voto.----------
--

------ K. Por todo lo expuesto, en tanto propongo admitir la pretensión de diferencias salariales fundadas en el rubro "antigüedad", entiendo que resulta prematuro el tratamiento de la alegada inconstitucionalidad del artículo 2 de la Ley V N° 66, ya que aún no existen sumas a cotejar con el tope previsto por la norma. Así lo voto.----------
------ A la misma cuestión el Dr. Mario Luis Vivas expresó:----------
--

------ I. La descripción circunstanciada que efectuara el Ministro del primer voto me exime de realizar esta tarea, a riesgo de incurrir en reiteraciones innecesarias.

Las doy aquí por reproducidas e ingreso al análisis de la controversia.----------
--

------ II. Como lo ha expuesto el colega, una de las pretensiones traídas a conocimiento de esta Sala se centra en dirimir una hipótesis de conflicto entre normas especiales y de igual jerarquía, cuales son las que prevén los sistemas de retribución de los empleados policiales de la Provincia del Chubut, ya sea en cuanto al haber básico como al rubro denominado zona.----------

------- En ese sentido, los actores pretenden la aplicación de dos normas que figuran en el Digesto Jurídico, en la Ley XIX N° 8, como artículos 147 y 149. Entienden que sus haberes deben ser calculados conforme lo dispone el mentado artículo 147, segundo párrafo y que se ha omitido abonar el adicional zona que establece el artículo 149, primer párrafo in fine. La demandada desconoce tal fundamento pues entiende que ha liquidado correctamente los salarios reclamados porque los mecanismos de cálculo de aquellos fueron reemplazados mucho antes de la vigencia del Digesto Jurídico, y que, por lo tanto, se encontraban derogados.----

------ Lo dicho nos lleva a indagar en la vigencia de las normas cuya aplicación se pretende y a establecer si correspondía que ellas figurasen en el Digesto Jurídico provincial.----------
--

------ Cabe recordar aquí que las Autoridades provinciales decidieron compilar, a través del Digesto Jurídico, las normas vigentes desde el año 1957. A tal fin, en la Ley N° 5199 (ahora Ley V N° 98, BO 26/7/04), en el artículo 1, se señaló como objetivos de ese Cuerpo legal la tutela del ordenamiento y la publicidad de las leyes provinciales generales vigentes y su reglamentación. También se fijaron los principios y procedimientos necesarios para llevar a cabo el régimen de consolidación instituido, tales los estipulados en el artículo 4, a saber: recopilación, unificación y ordenación. A ellos hizo referencia el Ministro prevotante.----------
------- Este laborioso emprendimiento, claro está, no podía estar exento de errores, pues estos forman parte del hacer propio de tan colosal tarea. Razón por la cual, a poco de andar esta novel compilación la Honorable Legislatura creó una Comisión Especial "…con la misión de evaluar los errores materiales que se detectaren en la confección del texto definitivo del Digesto Jurídico…" (artículo 1 de la Ley V N° 123).----------
--

------ Son interesantes e ilustrativas las propias palabras de los legisladores para fundar la creación de la Comisión aludida. Por ello, transcribo algunas partes del debate parlamentario del día 17 de marzo del 2009 (Reunión 1160-Sesión Ordinaria N° 3/2009).----------

------ El diputado Karamarko, expuso que la totalidad de los miembros presentes en la Cámara coincidían en acompañar el proyecto. En particular, manifestó que "…Tiene que ver con la creación de una Comisión Especial para el seguimiento ante la posibilidad de encontrar nuevos errores materiales…". Refirió también a una fe de erratas propuesta en tanto que "…la publicación de dos artículos de la Ley 1820…

se encuentran insertos en el Digesto Jurídico pese a haber sido derogados y que es necesario quitar…”.----------

------ El legislador Risso aportó al debate: “…Lo que no se puede sostener… es que por el hecho de que se publique una determinada norma en el Digesto y que por el hecho legislativo de la consolidación… esa manifestación parlamentaria, implique la modificación de las leyes que estaban en vigencia…. La no publicación, o la publicación equivocada o la incorporación de artículos que estaban derogados, no debe llevar, no debió haber llevado nunca… a la interpretación de que se modificó el sistema… sencillamente porque no hubo manifestación del legislador. La única forma de derogar una Ley es otra ley formal. Y la única forma de producir una ley formal es por voluntad expresa del Parlamento”. Añadió que su Bloque acompañaba la creación de la Comisión “…porque entendemos es una salida. Pero tampoco, se le puede echar sobre la espalda…, la responsabilidad de corregir todos los errores que puedan surgir del tipeo de cinco mil leyes o de la cantidad que han quedado incorporadas ahora…”.----------

------ En idéntico sentido se expresó el legislador Touriñán quien reconoció: “…Sabemos que el Digesto tiene errores y que vamos a ir subsanándolos a medida que vayan produciéndose…y el espíritu de todos los legisladores es que de la derogación no revive la norma derogada originariamente, es decir…que el Digesto por sí no legisla, legislan los legisladores, y los legisladores no han vuelto a la vigencia de la Ley N° 1820 en los términos que se pretende que haya vuelto…”.-

------ De tal modo ha quedado expuesto en las propias palabras de los señores legisladores que la elaboración del Digesto Jurídico provincial no estuvo exenta de errores.----------

------ III. Retomo aquí lo que señalé al comenzar mi voto: la cuestión en debate requiere examinar la vigencia de las normas base de estas pretensiones.----------

------ En principio destacaré que el antecedente de los artículos 147 segundo párrafo y 149 primer párrafo in fine de la Ley XIX N° 8 se encuentra en los artículos 148 segundo párrafo y 151 primer párrafo in fine del Decreto Ley N° 1561/77, respectivamente.----------
----- El estudio de la normativa dictada con posterioridad al año 1977 me permite coincidir con el Ministro que me precede en el voto respecto de la derogación de ambos preceptos.----------
-

------ Así lo entiendo pues el antiguo artículo 148 segundo párrafo del Decreto Ley N° 1561/77, en tanto preveía el sistema de liquidación de salarios de los empleados policiales enganchado en el 88% al haber mínimo de la policía federal, fue derogado por el Decreto Ley N° 1700/79.----------

------ Esa última disposición estableció los haberes de los empleados públicos provinciales, en forma general, y en particular, tuvo en consideración los salarios del personal de la Policía provincial. Esto surge de sus artículos 1, 47, 69 y del Anexo XI. Por el art. 1 se fijó que los sueldos básicos se liquidarían conforme lo fijado en las planillas anexas a esa norma. De este modo, en el artículo 47 se estableció la

remuneración del personal de seguridad, con remisión expresa a la escala del anexo XI. En este último se determinó el haber básico de cada jerarquía policial.----------
---

------ De manera expresa y genérica el artículo 69 de ese nuevo régimen sentenció que las normas que hubieran establecido otros sistemas de remuneraciones quedaban derogadas.----------

------ La contundencia del precepto me exime de mayores comentarios, pues no existe modo de interpretar que el sistema salarial del Decreto Ley N° 1561/77, en cuanto al enganche pretendido, hubiera subsistido. Se trató en aquel entonces del cambio de un sistema salarial por otro nuevo e incompatible, dispuesto por las autoridades provinciales, quienes decidieron fijar su propia política en esa materia.-

------ La vigencia de las normas en este caso se resuelve del modo en que lo dispone el principio de *"lex posteriori derogat priori"*, y en palabras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la siguiente manera: "… Siendo la ley… que rige en el caso, especial y de fecha posterior…, es de preferente aplicación al mismo…" (Fallos: 139:145).----------

------ IV. Este criterio también resulta aplicable a la segunda hipótesis de conflicto, esto es, al reclamo del pago del rubro zona basado en el artículo 149 primer párrafo in fine de la Ley XIX N° 8, antes identificado como artículo 151 primer párrafo in fine del Decreto Ley N° 1561/77.----------

------ No me caben dudas que con la sanción de la Ley N° 5718 se instituyó un nuevo sistema de pago del adicional zona, también denominado zona patagónica, al fijar una suma fija. Esta forma de abonar el rubro modificó la anterior que consistía en un importe calculado como un porcentaje.----------

------ Sostengo que se trata del mismo rubro abonado en forma distinta pues como lo entiende Marienhoff, el fin que lleva a implementar este adicional se vincula con el costo de vida. Así, señala el doctrinario que "…Tiende a compensar la mayor carestía de la vida existente en unas poblaciones con relación a otras, a la vez tiende a contemplar las consecuencias del alza de precios…" (Marienhoff, con cita de Gascón y Marín, Tratado de Derecho Administrativo, Abeledo Perrot, Tomo III- B, 4ta. Edición actualizada - año 1998, pág. 280).----------
---- Esto es lo que observo ocurre con el adicional en la forma prevista por la Ley N° 5718 (ahora Ley I N° 355), ya que se atiende al costo superior de vida que conlleva la residencia en nuestra provincia, aun cuando se distinguen, para el pago, que las localidades se encuentren en una u otra zona.----------

------ De todos modos, sostengo que ambas normas que cotejo el adicional zona tiene un solo y mismo fin, por lo que no puede ser abonado dos veces a los actores. Digo esto pues quienes accionan aseveran que cobran el ítem zona fijado en los artículos 5 y 6 de Ley N° 5718 (ahora Ley I N° 355) pero intentan esta acción a fin de percibir también idéntico adicional establecido en el artículo 151 primer párrafo in fine del Decreto Ley N° 1561/77.----------

------ Conforme lo analizado, se trata de distintos métodos de pago que no pueden coexistir por incompatibilidad. Entonces, encuentro que se activa el artículo 21 de la referida Ley Nº 5718, que expresamente derogó toda otra norma que se le opusiera.----------

------ V. Por lo analizado arribo a la conclusión de que ambos artículos que sustentan las pretensiones que trato, se encuentran derogados y no debieron ser incluidos en el texto de la Ley XIX N° 8 que trae el Digesto Jurídico provincial. Asimismo, encuentro desacertado el Informe que se acompaña, emanado de la Oficina del Digesto Jurídico, además de aclarar que la interpretación última de las leyes se encuentra reservada al Poder Judicial. Acuerdo con el Ministro Donnet en que estas pretensiones deben ser rechazadas. Así lo voto.----------

------VI. En cuanto al reclamo de diferencias salariales que se funda en una errónea aplicación de la metodología de cálculo del rubro "antigüedad", concordaré con el señor Ministro que me antecede, en que la posición de las partes, en oportunidad de demandar y contestar, giró en torno a la vigencia del artículo 149 primer párrafo de la Ley XIX N° 8.----------
-

------ Ahora bien, es sabido que para el ejercicio de la jurisdicción propia de los Tribunales, las controversias sujetas a su decisión deben mantener actualidad, la que está dada por el interés de las partes en una sentencia final sobre las cuestiones debatidas en el proceso, tanto las de hecho como de derecho.----------

------ En este sentido, ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "…La inexistencia de una controversia concreta susceptible de ser resuelta por los tribunales de justicia debe ser comprobada de oficio…por tratarse de un requisito necesario para el ejercicio de su jurisdicción, que no puede ser suplido por la conformidad de las partes…" (Fallos 193:524; 2º Edición 193:351).----------

------ En el sub lite surge claramente que con posterioridad a la contestación de la demanda se dictó el Decreto N° 1453/15, de modo que las cuestiones de derecho traídas por las partes quedaron superadas por dicha norma. Por ese instrumento jurídico el propio Poder Ejecutivo ha concordado con el criterio ya expuesto en las Sentencias Definitivas emanadas de este Superior Tribunal, en anterior composición.----------

------ Es así que la polémica sobre la vigencia de la norma que instituye el pago del rubro pretendido, denominado "antigüedad", ha perdido virtualidad, como así también aquella otra cuestión concerniente a la forma en que la Administración debe liquidarlo. No abundaré aquí sobre este último aspecto, ya que la metodología de cálculo de ese rubro se encuentra expresada en el propio Decreto y ya lo ha reseñado el primer votante. De tal modo, ya no corresponde que emita mi voto sobre este punto, pues este devendría en meramente teórico, actuación vedada a los Tribunales.----------
-

------ VII.- En cambio, la contienda mantiene interés para los actores en relación con las diferencias pretendidas por la denunciada errónea liquidación de haberes, desde

la promoción de la acción y por los períodos no prescriptos. Así es, en tanto esas liquidaciones, hasta la emisión del Decreto N° 1453/15, no han sido reajustadas, y por ello claramente quienes demandan conservan un interés particularizado en obtener un decisorio sobre la cuestión. Acoto aquí que tales diferencias han de ser las correspondientes a los cinco (5) años previos a la promoción de la acción, pues es jurisprudencia conteste del Tribunal que en tales supuestos debe aplicarse el art. 4027 inc. 3° del Código Civil, concordante con los arts. 7 y 2537 del Código Civil y Comercial.----------

------ Particularmente, y por lo que hasta aquí tengo dicho, no existen razones para apartarme de los fallos que han sentado la interpretación normativa del artículo 149 primer párrafo de la Ley XIX Nº 8, adoptada a posteriori por el propio Poder Ejecutivo provincial.----------

------ Además, encuentro acreditada esa forma inexacta de abonar el rubro antigüedad con la lectura de los recibos de haberes de los accionantes, que tengo a la vista, y en las que se destaca que solo se calcula este ítem sobre el Sueldo Básico y el Riesgo Profesional.----------

------ Derivado de ello, corresponde hacer lugar a la demanda de diferencias salariales incoada, y condenar a la Provincia del Chubut a abonar a los actores aquellas que surgen de la omisión de liquidar en el rubro antigüedad como asignación total del cargo, además del Riesgo Profesional, los adicionales denominados: Presentismo, Responsabilidad Funcional, Adicional remunerativo no bonificable del código 1195 y Adicional no remunerativo no bonificable del código 1872. También el rubro Zona, a calcularse solo hasta el 30 de septiembre del año 2012, porque a partir del 1 de octubre de ese año, por disposición legal, ya se contempla en la base de cálculo de este ítem al adicional antigüedad. Y, desde el 1 de enero de 2015, los adicionales denominados Dedicación Especial y Asignación Especial. En la etapa de ejecución de sentencia se determinarán las diferencias salariales para cada actor, de manera que se permita constatar la percepción de cada uno de estos adicionales, durante la vigencia de la relación de empleo público y por los períodos no prescriptos. Así lo voto.----------
-

------ VIII. En cuanto a la pretensión de inconstitucionalidad del artículo 3 de la Ley N° 5415, que derogó el artículo 149 del Decreto Ley N° 1561/77, reseñó el primer votante las posturas que expusieron las partes ante la jurisdicción, por lo que ingresaré directamente al tratamiento del tema.----------

------ Bien ha advertido el Dr. Donnet sobre la sanción de la Ley I N° 512, que volvió a establecer el mismo sueldo básico para los Agrupamientos Comando y Servicios, por lo que, en principio la polémica de autos se ha tornado abstracta a partir de la entrada en vigencia de esa nueva legislación. Así, para el futuro. Sin embargo, diré que la controversia mantiene vigencia en tanto subsiste el interés de los actores en la declaración de inconstitucionalidad del artículo objeto de reproche, pues solo a través del reconocimiento de su pretensión podría habilitarse el pago de las reclamadas diferencias salariales. Puede leerse en Fallos 336:593 “…si pese a que dicha norma se encuentra actualmente derogada el recurrente mantiene interés en la definición legal de su situación en razón de que, durante el período por el que

formula el reclamo indemnizatorio, su derecho se encontraba regido por ella…", que es el caso de autos.----------

------ IX. La denuncia de afectación por el artículo 3 de la Ley N° 5415, de los derechos constitucionales consagrados por los artículos 14 bis, 16, 17 y 18 de la Carta Magna Nacional conlleva a verificar si existe la contradicción expuesta en la demanda o, si por el contrario, los preceptos mencionados se encuentran en armonía dentro del sistema jurídico.----------

------ Para ello hay que reconocer, en principio que la relación jurídica que vincula a los dependientes policiales con el Estado empleador, se encuentra regida por su propio Estatuto, en el que se determinan las condiciones de ingreso y los derechos y obligaciones a los que da nacimiento la designación en el cargo, conforme el encuadramiento escalafonario dado.----------

------ Según se dijo en numerosos fallos de este Tribunal "…La organización del aparato administrativo es de competencia del poder administrador, incluida la selección y promoción de sus agentes y no puede desconocerse su facultad de sujetarse, al efecto, a su propio criterio de eficacia, quedando libre de censura judicial -no de control- lo que disponga en tal sentido; naturalmente, siempre que ello no contradiga el principio de legitimidad, ni la razonabilidad […] El servicio público requiere indefectiblemente de un soporte de recursos humanos para su realización y para ello, se establece una estructura de personas. (Derecho de la Función Pública - DYKINSON - Madrid -3º Ed.). [...] un soporte idóneo para cumplir el fin de interés general. Y ello justifica la técnica de predeterminación unilateral de las condiciones de trabajo, la exorbitancia del régimen, que ha encaminado la tesis de los "estatutarios" para calificar la relación, o aun estimándola contractual, ante la limitada autonomía de la voluntad, conduce a encuadrarla como de adhesión…" (SD. N° 05/SCA/05 y 11/SCA/10).----------

------ Producido el encasillamiento en el respectivo agrupamiento del régimen policial, los actores conocieron, por encontrarse incluidos y expresos en su Estatuto, los derechos y obligaciones instituidos para cada uno. De este modo, como lo expuso el Dr. Donnet, existen diferencias sustanciales entre uno y otro Agrupamiento, pese a que a ambos se les reconoce el estado policial como una situación jurídica especial del personal (art. 27).----------

------ Así, en cuanto a los requisitos de capacitación para el ingreso en la fuerza, el régimen dispone algunos específicos y distintos para cada agrupamiento (*vide* arts. 39 inc. c), 40, 42, 43, 44 y 45). También en cuanto a las actividades concretas atinentes a la función, pues las tareas de seguridad son específicamente asignadas a la Agrupación Comando, en tanto que a la Agrupación Servicios se le destinan tareas administrativas y técnicas. Además, según lo previsto por el artículo 72 segundo párrafo, los Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Agrupación Comando en actividad tienen obligación, cuando visten uniforme policial, de portar, en forma ostensible, las armas reglamentarias con los correajes correspondientes.----

---------- Atiendo a estas diferencias para considerar que, en la medida que el propio Estatuto prevé distinciones objetivas entre los derechos y obligaciones de cada Agrupamiento, el Legislador pudo contemplar de modo diferente a una clase para remunerarla con un haber básico superior al de la otra. Entonces, no encuentro que el caso configure una violación a la garantía de la igualdad, conforme los parámetros de la jurisprudencia, especialmente los elaborados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.----------

------ Recuerdo que ese Alto Tribunal falló "…Que desde sus primeras decisiones (Fallos:16:118) este Tribunal ha interpretado que la garantía de la igualdad consagrada en la Constitución Nacional consiste en aplicar la ley a todos los casos ocurrentes según sus diferencias constitutivas, de tal suerte que no se trata de la igualdad absoluta o rígida sino de la igualdad para todos los casos idénticos, lo que importa la prohibición de establecer excepciones que excluyan a unos de los que se concede a otros en las mismas circunstancias (Fallos: 123:106; 180:149); pero no impide que el legislador establezca distinciones valederas entre supuestos que estime diferentes, en tanto aquéllas no sean arbitrarias, es decir, que no obedezcan a propósitos de injusta persecución o indebido privilegio, sino a una objetiva razón de discriminación (Fallos: 301:381, 1094; 304:390). Que, en este sentido, la garantía de la igualdad exige que concurran "objetivas razones" de diferenciación que no merezcan la tacha de irrazonabilidad (Fallos: 302:484 y 313:1638, considerando 11 del voto del juez Belluscio). Ello determina la existencia de alguna base válida para la clasificación, distinción o categoría adoptada, lo que significa que debe haber algún motivo sustancial para que las propiedades o personas sean catalogadas en grupos distintos (doctrina de Fallos: 138:313; 147:402), considerado como tal aquel conducente a los fines que imponen su adopción (Fallos: 256:241. cons. 5° y sus citas) e inválido el que se apoya en un criterio de distinción arbitrario, es decir, que no obedece a fines propios de la competencia del Congreso, o si la potestad legislativa no ha sido ejercida de modo conducente al objeto perseguido (Fallos: 250:410, considerando 2°). (Fallos 321:3630).----------

------ Aduno a lo ya expuesto que la situación imperante al momento de sancionarse la Ley N° 5415 (conflicto con la fuerza policial, que derivó en un acuartelamiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia) deja expuesto el fin de la norma, pues se procuró sanearla a través del incremento en el haber básico de ambos agrupamientos, pero en mayor medida al agrupamiento encargado de la seguridad pública, objetivo trascendente y fundamental para la comunidad provincial. Acoto, además, que la medida legislativa asumida fue consensuada con los empleados policiales para destrabar el entuerto. Así surge palmario de las palabras del Diputado Touriñan en la sesión del debate parlamentario. Dijo en ese entonces: "…como producto de los incidentes ocurridos en el ámbito de la provincia con la fuerza policial, mantuvimos conversaciones con el resto de los diputados de la Casa y con algunos policías que se encontraban acuartelados en la ciudad de Comodoro Rivadavia y nos comprometimos a suscribir un acuerdo que iba a ser refrendado por la Legislatura en la sesión del día de hoy…".----------

------ Es de aplicación al *sub exámine* la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, que consideró que "…la posibilidad de identificar y distinguir las tareas que la comunidad quiere destacar y remunerar en

forma especial por tratarse de funciones especialmente críticas en determinados momentos es una función que compete a los poderes políticos del Estado y que no puede ser interferida por el control judicial sino media arbitrariedad, abuso de poder o irrazonabilidad en su aplicación (L.S. 385-205)…" (autos: "Romero Peñaloza, Juan Manuel y Ots. c/ Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza s/APA", sentencia del 04/11/2008).----------

------ X. La claridad del caso me exime de abundar en otras consideraciones, y me lleva a desechar de plano las invocadas violaciones constitucionales, pues no se encuentra presente la igualdad de situaciones que impida un tratamiento diferenciado en la remuneración. Concuerdo por ello con el primer votante en rechazar la pretensión de inconstitucionalidad. Así lo voto.----------

------ XI. Acuerdo también con el Ministro Donnet en que resulta prematuro abordar el cuestionamiento al límite del artículo 2 de la Ley V N° 66, si aun no se ha determinado a cuánto ascienden las diferencias salariales correspondientes al rubro antigüedad para cada accionante. Así lo voto.----------
A la segunda cuestión, el Dr. Donnet dijo: ----------

------ Conforme a la primera cuestión, propicio al Acuerdo: 1) Hacer lugar parcialmente a la demanda instaurada por los actores contra la Provincia del Chubut. Condenar a esta última a abonar a aquellos, las diferencias salariales que fundan en el artículo 149 primer párrafo de la Ley XIX N° 8 (rubro antigüedad), más intereses a computar a la tasa de descuento de documentos comerciales del Banco del Chubut SA, desde que cada suma es debida y hasta su íntegro pago. Rechazar las pretensiones de diferencias de salariales que se fundan en los artículos 147 *in fine* y 149 primer párrafo *in fine* (rubro zona) de la Ley XIX N° 8; así como la que se sustenta en la declaración de inconstitucionalidad del artículo 3 de la Ley N° 5415.-
----

------ 2) Diferir para la etapa de ejecución de sentencia el cálculo de las diferencias salariales correspondientes al art. 149 primer párrafo de la Ley XIX Nº 8. Cada uno de los actores deberá presentar una liquidación individual por el período de cinco años anteriores a la fecha de presentación de la demanda y hasta la notificación de este fallo a la accionada. En ella deberá cotejar lo que percibió mensualmente por el rubro antigüedad y lo que debió haber percibido, tomando como base de cálculo, de los adicionales que integran su haber, los siguientes: Presentismo, Responsabilidad Funcional, Adicional Remunerativo no Bonificable Código 1195, Adicional no Remunerativo no Bonificable Código 1872; Zona, hasta el 30/09/2012; Dedicación Especial y Asignación Especial desde el 01/01/2015. Todo conforme el análisis efectuado en este fallo.----------

------ 3) En materia de costas, y en cuanto al rechazo de la acción con base en los artículos 147 in fine y 149 primer párrafo in fine, diré que no encuentro sustento para apartarme del criterio expuesto en los decisorios que, desde anteriores integraciones, las han impuesto al Estado Provincial. Numerosas son las sentencias en las que se hizo hincapié en la existencia de un error en la tarea de compilación de las leyes llevada a cabo en el Digesto Jurídico, tarea encargada por el Estado Provincial. Se adunó también que no se propició la subsanación de este error, como se lo hizo con otros dispositivos legales, por lo que los dependientes policiales pudieron

razonablemente creerse con derecho a interponer la acción entablada. Añado a ello que pese a que el Tribunal remitió oficios para anoticiar del dictado de las sentencias a la Oficina del Digesto Jurídico, aún a la fecha se verifica que el texto de aquel artículo cuestionado continúa presente en el Digesto Jurídico, Ley XIX N° 8. En lo demás, me remito a los fundamentos esgrimidos en las SD N° 1 a 9, 23 a 29/SCA/14, 9 a 15/SCA/15, 9, 10 y 18/SCA/16, entre otras.----------

------ Sin perjuicio de ello, también he propuesto que se desestime la pretensión de inconstitucionalidad del artículo 3 de la Ley N° 5415; pero he admitido que se acoja la pretensión de diferencias salariales derivadas de la liquidación del rubro antigüedad. Entonces, atiendo al resultado final de la acción y considero que la condena en costas debe ser impuesta en un veinticinco por ciento (25%) a los actores y en un setenta y cinco por ciento (75%) al Estado Provincial.----------

------ 4) En orden a los honorarios, tengo presente las circunstancias antes apuntadas para ponderar su regulación. Propongo aplicar aquí el criterio de la Corte Suprema Nacional que ha dicho: "…A los fines de regular honorarios profesionales, frente a la magnitud excepcional del monto del juicio, también debe ser ponderada la índole y extensión de la labor profesional cumplida en la causa, para así acordar una solución justa y mesurada, que concilie tales principios y que además tenga en cuenta que la regulación no depende exclusivamente de dicho monto o, en su caso, de las escalas pertinentes, sino de todo un conjunto de pautas previstas en los regímenes respectivos que pueden ser evaluadas en situaciones extremas, como la presente, con un razonable margen de discrecionalidad, entre las que se encuentran la naturaleza y complejidad del asunto, el mérito de la causa, la calidad y eficacia y extensión de la tarea realizada…" (Fallos 329: 94; 331:2550).

------ Pauta que también ha sido aplicada en los decisorios que ya he citado, a los que me remito. Destaco aquí que esos fallos se señaló: "…Al compatibilizarse la remuneración a las tareas concretamente realizadas…no aparecen como razonables los honorarios reclamados sobre la base de aplicar el monto del juicio, toda vez que de ese modo resultarían emolumentos desproporcionados con la índole y extensión de la labor profesional cumplida en la causa…" (Voto de los Dres. Julio S. Nazareno y Carlos S. Fayt, Fallos 322:1100). Además, se expuso: "…La base de la regulación en estos autos no será el monto reclamado por el actor (las pretendidas diferencias salariales) porque llevaría a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución y las labores cumplidas, más aun teniendo en cuenta el resultado obtenido en el pleito…", criterio que propongo adoptar para el presente pleito.----------

------ 5) Lo expuesto, adunado con el principio de la equidad me induce a valorar la naturaleza y complejidad del asunto, el resultado obtenido, la calidad y eficacia de la labor profesional conforme las pautas establecidas en los artículos 5, incs. b), c) y d) y 11 de la Ley XIII N° 4, para efectuar la pertinente regulación de honorarios. Así, propongo al Acuerdo fijar para los letrados que representaron a la parte actora, Dres. O. R. H. y J. E. F., en conjunto, en sesenta (60) jus. En cuanto a la representación letrada de la demandada, Provincia del Chubut, al ex Fiscal de Estado, Dr. B. M. E., por su actuación en una etapa del proceso, en dieciséis (16) jus, y a los letrados apoderados, Dres. D. E. F. y G. J., en conjunto, por esta etapa, en el treinta por ciento (30%) de lo regulado a su patrocinante. A la Dra. G. J., por

la segunda etapa, en dieciséis (16) jus. Para el Perito Contador F. M. G., por las mismas consideraciones expuestas, en veinte (20) jus, de conformidad al artículo 11 inc. a), b), d) e i) de la Ley XIII N° 18 y artículo 60, tercer párrafo de la Ley XIII N° 4, concordante con el artículo 15 de la primera de las leyes mencionadas. En todos los casos, la "medida arancelaria" será el valor del "jus" a la fecha de este pronunciamiento. Todos con más IVA si correspondiere.----------

----- A idéntica segunda cuestión, el Dr. Vivas dijo:----------

------ Conforme he votado a la primera cuestión, concuerdo con la decisión propuesta por el Ministro Donnet.----------

------ Con lo que se dio por finalizado el acto, quedando acordado dictar la siguiente;----------

---------- **S E N T E N C I A :** ----------

-

------ **1º) HACER LUGAR PARCIALMENTE** a la demanda impetrada por los señores A. A. G. P., A. M. B.,, M. A. T., E. B. G., H. D. R., H. M. S., H. D. L., S. L. C., J. V. C., G. S. B., R. M. H., O. R. A. D., C. F. S., V. A., C. A. A., C. M. S., J. A. R., C. S. G., M. A. C., F. E. M., H. R. C., J. M. S., J. O. M., E. H. L., N. D. G., J. R. C., S. M. A., R. A. A., S. M. G., F. E. R., G. M. J. P., A. L. T., N. O. H., C. A. S., F. A. T., D. H. F., J. O. G., J. L. S., M. L. R., P. C. B., W. D. F., C. A. O., N. A. A., H. E. Q., N. E. F. S., D. M. A., R. C. S., C. D. R., D. I. T. y A. P. G. contra la Provincia del Chubut. Condenar a esta última a abonar a los actores las diferencias salariales fundadas en el art. 149 primer párrafo de la Ley XIX Nº 8 (rubro antigüedad), con más intereses conforme la tasa para operaciones de descuentos de documentos comerciales del Banco del Chubut SA, desde que cada suma es debida y hasta su íntegro pago. **RECHAZAR** las pretensiones de diferencias salariales que se fundan en los arts. 147, in fine, y 149 primer párrafo, in fine, de la Ley XIX N° 8, y la inconstitucionalidad del art. 3 de la Ley N° 5415.-

------ **2) DIFERIR** para la etapa de ejecución de sentencia el cálculo de las diferencias salariales correspondientes al art. 149 primer párrafo de la Ley XIX Nº 8, debiendo liquidarse como se indica en la Segunda Cuestión.----------

------ **3) IMPONER** las costas en un 25 % a los actores y en un 75% a la Provincia del Chubut (art. 69, segundo párrafo del CPCC), por las razones dadas en los Considerandos de la presente.----------
-

------ **4) REGULAR** los honorarios de los profesionales intervinientes: por la actora, a los Dres. O. R. H. y J. E. F., de manera conjunta, en sesenta (60) jus. Por la demandada, Provincia del Chubut, al ex Fiscal de Estado, Dr. B. M. E., por su actuación en una etapa del proceso, en dieciséis (16) jus. A los letrados apoderados, Dres. D. E. F. y G. J., en conjunto, en el treinta por ciento (30%) de lo regulado a su patrocinante. Asimismo, a la Dra. G. J., por la segunda etapa, en dieciséis

(16) jus (arts. 5 incs. b), c) y d) de la Ley XIII N° 4). Con más IVA si

correspondiera.----------
-

------ **5) FIJAR** los estipendios del Perito Contador F. M. G., en veinte (20) jus, art.11 inc. a), b), d) e i) de la Ley XIII N° 18 y artículo 60, tercer párrafo de la Ley XIII N° 4, concordante con el artículo 15 de la primera de las leyes mencionadas. Con más IVA si correspondiera.----------

------ **6) REGÍSTRESE** y notifíquese.----------

Fdo. MIGUEL ANGEL DONNET - MARIO LUIS VIVAS

Reciba en Secretaría el día 11 de mayo del 2017 bajo el N° 081 SCA (S.D.) conste.